

## NOTICIAS CON CLAVE

**MADRID, 19-III-71.**—El ex Presidente boliviano y actual embajador de su país en España, general Alfredo Ovando Candía, ingresará seguramente mañana o el lunes en la clínica Puerta de Hierro, de Madrid, para ser sometido a tratamiento médico. Según fuentes familiares, el general Ovando padece una úlcera gástrica.

Puestos al habla con el domicilio del embajador boliviano en Madrid, se ha comunicado que días atrás el general Ovando se había personado en la citada clínica madrileña para ser sometido a un reconocimiento general.

**HAMBURGO, 1-IV-71.**—En la mañana de hoy ha sido asesinado en esta ciudad el ex cónsul general de Bolivia en Hamburgo, Roberto Quintanilla, que falleció en un hospital hamburgués a consecuencia de las graves heridas sufridas por arma de fuego.

El señor Quintanilla, todavía con vida cuando fue trasladado al hospital, presentaba dos heridas en el pecho producidas por una pistola disparada desde poca distancia. El suceso tuvo lugar en el despacho del domicilio privado de la víctima.

Al término de las primeras investigaciones realizadas por la Policía local, en centros autorizados se estima probable que existan motivos políticos en el asesinato del ex cónsul boliviano.

Coincidiendo con los últimos ataques contra el ex cónsul general de La Paz en Hamburgo, en la prensa boliviana, el señor Quintanilla negó toda presunta relación con la muerte del Presidente boliviano Barrientos.

Según sus declaraciones a la prensa alemana, el ex cónsul precisó que las acusaciones acerca de una supuesta complicación con el accidente de Barrientos y con un presunto contrabando de armas a Israel, eran «simples calumnias» con el fin de causarle desprestigio profesional. (Efe.)

**LA PAZ, 2-IV-71.**—El Ministerio Público requirió oficialmente ayer la presencia en La Paz del embajador de Bolivia en España y ex Presidente de la República, general Alfredo Ovando, para que responda a los cargos que se le imputan, relacionados con un contrabando de armas hacia Israel y con la muerte del Presidente Barrientos. El embajador se encuentra internado en la clínica Puerta de Hierro, de Madrid, como consecuencia de una intervención quirúrgica. (Efe.)

«No tenemos fecha fijada para regresar a La Paz», respondió ayer,



Algunas sospechas que circularon antes del golpe militar de Ovando señalándole como beneficiario de la muerte de Barrientos se habían disipado ante la interesante actitud de Ovando, que la izquierda contemplaba con expectativa. (En la foto, ceremonia en que Ovando presta juramento como Presidente; a su izquierda, el general Juan José Torres.)

# LOS MISTERIOS DE BOLIVIA

## UNA LARGA SERIE SANGRIENTA

**CARLOS MARIA GUTIERREZ**

EN Hamburgo, una joven de apariencia latinoamericana entró al despacho del cónsul de Bolivia, coronel Roberto Quintanilla, lo mató eficientemente de tres balazos y desapareció. Veinticuatro horas después, el Ejército de Liberación Nacional —la guerrilla boliviana fundada en 1967 por el «Che» Guevara— emitió un comunicado en La Paz reivindicando esa acción como propia y definiéndola como la ejecución de un asesino y torturador policial. De este modo parecía zanjarse una vieja cuenta entre Quintanilla y el E. L. N.

La muerte del cónsul, sin embargo, viene a complicar más aún otro turbio asunto, que ahora comienza a desvelarse: la indole real del desastre aéreo donde murió el Presidente René Barrientos, en abril de 1969, y las motivaciones ocultas de ese hecho.

Desgraciadamente para la comisión investigadora de alto nivel que designó hace unas semanas el Presidente Juan José Torres, el coronel Quintanilla —que podía haber aportado datos fundamentales— ha sido eliminado como testigo. La semana anterior, ante las evidencias que iban acumulándose, el Gobierno boliviano le había destituido de su cargo diplomático y ordenado su regreso a La Paz. No se sabe si Quintanilla pensaba cumplir esa orden. Pero es evidente que la acción del E. L. N., aunque obedeció a un problema distinto y fue decidida mucho antes de la investigación en curso, puede favorecer la impunidad de un grupo de políticos, militares y aun diplomáticos extranjeros, culpables de uno de los más escandalosos «affaires» bolivianos, en un país donde la gente ya no creía asom-

brarse de nada: Detrás de la muerte de Barrientos y de otras igualmente inexplicables que la siguieron se esconde un negocio de cincuenta millones de dólares, la estafa a licencias suizas de exportación de armas, la probable participación del Gobierno israelí en un contrabando de armamentos y la actuación, protagonista y cómplice, de dos Presidentes, varios generales y algunos embajadores.

Quintanilla, según se supone, era sólo un engranaje menor en el caso. Pero su puesto de confianza en el Ministerio del Interior, su condición militar y su estrecho contacto con la C. I. A. y otros organismos de Inteligencia le habían permitido conocer de cerca —y quizá participar con algún beneficio— el «affaire». Con más seguridad, en cambio, estaba al tanto de instigadores y ejecutores de la cadena

# LOS MISTERIOS DE BOLIVIA

## NOTICIAS CON CLAVE

telefónicamente, la señora de Ovando a un redactor de Cifra que previamente le había leído la noticia de la agencia Efe que antecede.

Añadió la esposa del general Ovando que éste permanecerá en la clínica —donde se encuentra hospitalizado desde el pasado día 21 de marzo— hasta que lo juzguen conveniente los médicos que le atienden. (Cifra.)

**HAMBURGO, 2-IV-71.**—En las abundantes informaciones de la prensa alemana de esta mañana sobre el asesinato del cónsul general de Bolivia en Hamburgo, Roberto Quintanilla, se insiste en un detalle significativo que ya fue anotado ayer, pocas horas después de la criminal agresión: Quintanilla proyectaba, efectivamente, abandonar Hamburgo, pero no es seguro que se propusiera regresar a su país.

Las sospechas de que pueda tratarse de un crimen con motivaciones políticas y las críticas que en la prensa boliviana se habían dirigido tiempo atrás contra el diplomático han dado pie a las autoridades policiales alemanas para la suposición de que el regreso de Quintanilla a Bolivia no habría sido realmente proyectado por él.

«Die Welt» recoge declaraciones de Juan Carlos Camacho, fiscal general de Bolivia, quien considera «figura clave» a Roberto Quintanilla, cuya desaparición dificulta las investigaciones en el caso Barrientos.

El diplomático asesinado había expresado su intención de solicitar asilo político en la República Federal Alemana. (Efe.)

**LA PAZ, 15-IV-71.**—Por decisión del Gabinete en pleno del Gobierno boliviano, el embajador en España y ex Presidente de la República, general Alfredo Ovando, fue destituido de su cargo diplomático, anunciándose oficialmente anoche que se exigirá su inmediato retorno al país para que asuma la defensa contra los cargos que pesan sobre su persona. (Efe.)

**MADRID, 16-IV-71.**—El general Ovando está dispuesto a volver a Bolivia para hacerse cargo de su defensa en relación con la muerte del Presidente Barrientos, según se ha informado a un redactor de Europa Press en su domicilio.

Según la misma fuente, el general Ovando regresará a su país una vez se haya restablecido totalmente de la intervención quirúrgica sufrida hace unas semanas en la clínica Puerta de Hierro, de Madrid. (Europa Press.)

**LA PAZ, 19-IV-71.**—Alberto Larrea Humeros, ex ministro de Economía en el Gobierno del general Barrientos, ha sido asesinado hoy en La Paz, informa la prensa boliviana.

de muertes que ensangrentó el tráfico de armas. La personalidad del ejecutado coronel, aunque haya sido colateral, da una buena medida del nivel en que desde 1968 se desarrolló el «affaire». Famoso en Bolivia por su crueldad, su avaricia de dinero y su afición a las extranjeras rubias, «Toto» Quintanilla —un cholo de espeso bigote negro, invariable ropa civil y voz atiplada— estaba condenado a muerte por el E. L. N. desde hacía un año. Cargo principal: En 1969 había hecho asesinar a Inti Peredo, sucesor del «Che» en la jefatura del E. L. N.

Después de capturar a Peredo durante el allanamiento de su escondite en La Paz, a principios de septiembre de ese año, lo había hecho conducir a las oficinas del D. I. C. (Dirección de Investigación Criminal, la Policía política). Allí, con otros agentes, lo mató a culatazos y puntapiés durante un interrogatorio. (El cadáver fue trasladado nuevamente a la casa, y se le mostró a la prensa como un caso de suicidio. El médico que había accedido a certificar esa forma de fallecimiento fue también ejecutado por el E. L. N. a mediados de 1970.) Y la sentencia ejecutada en Hamburgo estaba, además, fundamentada en otros cargos: agente de la C. I. A., torturador de presos políticos y, por lo menos en dos casos, responsable por asesinato de líderes sindicales.

Poca gente llorará en Bolivia o en otra parte la ejecución del coronel: ni siquiera sus antiguos jefes. El año pasado, en La Habana, el ex ministro del Interior de Bolivia hasta 1968, Antonio Arguedas, había resumido a un periodista de prensa latina la carrera de Quintanilla: «Cuando me designaron ministro del Interior, una de las condiciones que ya había puesto la C. I. A. era que el coronel Roberto Quintanilla, que por entonces era comandante del Centro de Emergencia, fuera a recibir un curso de la C. I. A. a Washington. Y entonces se me dijo: "El coronel Quintanilla va a trabajar en el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior". O sea, Quintanilla ya era parte del aparato de la C. I. A. Más tarde, durante la guerrilla del «Che», y hasta que Ovando lo designara cónsul general en Hamburgo (posiblemente a petición propia, ante la sentencia del E. L. N. que pesaba sobre él) será ayudante mayor del Ministerio y director de la Inteligencia policial. (En esa condición participará en los interrogatorios y torturas a Régis Debray, en Camiri y otros sitios.)

Esta duplicidad del personaje se ha mantenido hasta después de su muerte. Porque el cadáver de Quintanilla figura ahora simultáneamente en dos listas de sangre boliviana: es el séptimo enemigo o delator eliminado por el E. L. N. y, al mismo tiempo, la novena víctima relacionada con el accidente de

Barrientos y el caso del contrabando de armas.

En la primera lista no ha habido mayores misterios: a cada muerte, el E. L. N. proporcionó siempre el correspondiente comunicado y sus razones. Pero los cadáveres de la segunda nómina —eliminados mediante violencia que ha ido desde el abatimiento a tiros desde un helicóptero hasta la dinamita y el estrangulamiento— se han sucedido sin que aparecieran culpables. Hasta que Torres designó una comisión de encuesta, con severas instrucciones de profundizar, todos los casos se habían cerrado con los clásicos veredictos: «Muerte por accidente» o «Muerte a manos de persona o personas desconocidas».

La primera desaparición vinculada al caso fue la de un oscuro dirigente sindical, Carlos Quintana, que apareció muerto por la Policía casi al mismo tiempo que el conocido líder minero Isaac Camacho Torrijos. Las denuncias por el asesinato de Camacho Torrijos oscurecieron el de Quintana: Se pensó simplemente en otra víctima de la represión barrientista. Se supo más tarde que Quintana poseía datos comprometedores sobre actividades de Barrientos en Suiza.

Después ocurrió el accidente presidencial. El 18 de abril de 1969, cuando el helicóptero que conducía a Barrientos despegaba desde el valle de Arque, ante la mirada de

miles de campesinos con quienes había compartido una asamblea, el piloto pareció perder el dominio del aparato, que se estrelló contra un cable de alta tensión, desplomándose envuelto en llamas. Del destrozado fuselaje se rescataron una hora después los cadáveres carbonizados del Presidente, de su edecán, Lorigildo Orellana, y del piloto, Rafael Estivariz.

A partir de ahí en adelante se inicia en Bolivia una serie de muertes no aclaradas. Pero la situación social y los intereses políticos de las víctimas eran tan diferentes que pocos suspicaces intentaron relacionarlos. En 1969, el senador y dirigente campesino de Cochabamba, Jorge Soliz, que había sido ministro de Barrientos, y era su amigo, apareció muerto a tiros. En febrero de 1970 es encontrado en su imprenta, tres días después de su muerte y estrangulado, el ex ministro del Gobierno Paz Estenssoro y el director de un pequeño periódico, Jaime Otero Calderón. Algunas semanas más tarde, Alfredo Alexander Jordán (rico propietario y director del periódico derechista «Hoy») recibía un paquete con el rótulo: «Obsequio de la Embajada de Israel». Al abrirlo explotó una bomba, matando a Alexander Jordán y a su esposa, Martha. Y, según otras versiones, habría que añadir a esas ocho primeras desapariciones otras dos: las del gue-

Hace dos semanas, en Hamburgo, una joven de apariencia latinoamericana entró al despacho del cónsul de Bolivia, coronel Roberto Quintanilla, le mató eficientemente de tres balazos y desapareció sin dejar rastro.





La muerte del cónsul —Quintanilla— viene a complicar más aún otro turbio asunto que ahora comienza a desvelarse: la índole real del desastre aéreo donde murió el Presidente René Barrientos, en abril de 1969, y las motivaciones ocultas de este hecho.

rrillero del E. L. N. Elmo Catalán y su esposa, Jenny Koeller, muertos a tiros por un individuo infiltrado en el grupo revolucionario.

La eclosión a la luz pública de una relación entre el contrabando de armas a Israel y la muerte de Barrientos organiza ahora, retroactivamente, la implicación de esas muertes inexplicadas en un siniestro juego de intereses políticos y económicos. En ese proceso, que se hace inteligible a medida que se acumulan las revelaciones, va situándose también la responsabilidad de los protagonistas que vivieron para usufructuar el negocio en sí, la desaparición o el silencio de los demás.

En febrero de 1970, a escasos cinco meses del golpe militar que había situado en el Gobierno al general Alfredo Ovando Candia, el régimen proporcionaba una imagen nacionalista de izquierda, reforzada por su espectacular nacionalización de la Bolivian Oil, filial de la Gulf. Algunas sospechas que circularon antes del golpe, señalando al general como beneficiario de la muerte de Barrientos se habían disipado ante la interesante actitud de Ovando, que la izquierda contemplaba con expectativa. En abril del año anterior, el helicóptero de Barrientos había sufrido un indudable accidente ante miles de testigos: Ovando, además, se encontraba por ese tiempo en los Estados Unidos.

Pero cuando apareció estrangulado Jaime Otero Calderón surgieron veladamente, en algunos cafés de La Paz, los primeros comentarios: Otero Calderón había anunciado que iba a publicar en la próxima edición de su diario detalles sobre un contrabando de armas hacia Israel, realizado por el Gobierno Barrientos: las gavetas de su escritorio aparecieron descerrajadas y robados todos sus documentos. Recobró entonces entidad la muerte del senador Soliz. Otro dirigente campesino de Cochabamba, Vidal Jiménez, anunció a la prensa que Soliz había sido asesinado por motivo similar al de Otero: la denuncia del contrabando. Y, poco a poco, no fue difícil retomar las viejas sospechas sobre el accidente de Barrientos y organizar, con datos que iban surgiendo de fuentes cada vez más numerosas, una hipótesis crecientemente peligrosa para Ovando: el discreto general nacionalista había sido íntimo socio de Barrientos en su período de dictadura. Se le conocían otros episodios de enriquecimiento a costa del Estado (como la desaparición de millones de dólares originados en una colecta nacional para víctimas de inundaciones). Finalmente, la muerte violenta de Barrientos cumplía dos extremos muy deseables para Ovando: eliminar a su competidor político y acallar al molesto cómplice del todavía hipotético «affaire».

La bomba que silenció para siempre al matrimonio Alexander Jor-

dán parece haber sido un método preventivo: era posible que «hoy», un diario tabloide, ágil y algo sensacionalista, vinculado en parte a intereses financieros de Alemania Occidental, intentara sistematizar la investigación y denunciar el doble «affaire» del helicóptero y las armas suizas ilegalmente enviadas a Israel. (Poco antes de la muerte de Otero, incluso, Ovando había ofrecido a Alexander Jordán —opositor de derecha y defensor de la Gulf— una transacción: condonar su deuda con el Banco de Bolivia, ascendiente a varios millones de pesos y designarle para la Embajada que deseara. Alexander había rechazado la oferta, seguro de la inminencia de un golpe derechista, organizado por la C. I. A., que prometía derrocar al general.)

En abril, el aparato de Inteligencia del Gobierno se puso en movimiento. Ovando, pese a su nacionalismo de izquierda, había mantenido exactamente el mismo «staff» que la C. I. A. y Barrientos utilizaban en el Ministerio del Interior. El coronel Quintanilla seguía siendo director de Inteligencia y ayudante mayor, y al producirse el atentado contra los Alexander Jordán, dio su versión: un guerrillero del E. L. N., ya detenido, había confesado ser el autor de esas muertes. De inmediato, el E. L. N. desmintió la noticia. Entonces, Quintanilla atribuyó el atentado a terroristas de un partido de derecha: la Falange Socialista Boliviana.

La Falange, a su vez, rechazó la acusación, y se generalizó una ofensiva contra el Gobierno por parte de la izquierda. El partido comunista reclamó públicamente

la exoneración de Quintanilla y del coronel Rafael Loayza, como probados agentes de la C. I. A. El 6 de abril apareció en Bolivia un comunicado de unas hasta entonces inexistentes fuerzas armadas rebeldes (que algunos observadores atribuyeron a un método de denuncia indirecta utilizado por el ex ministro Antonio Arguedas), donde por primera vez se refería con franqueza al «affaire» y se unían los dos hechos principales:

Los asesinatos de Jorge Soliz, Jaime Otero Calderón, los esposos Koeller-Catalán, regularmente espaciados en la llamada «serie de los 14» y perpetrados con idéntica precisión... tenían como verdadero objetivo silenciar la denuncia del escandaloso negocio de armas realizado por el régimen de Barrientos. El pueblo debe preguntarse: «¿Dónde está el armamento adquirido en Suiza y supuestamente entregado a los campesinos de Jorge Soliz?».

Aunque las fuerzas armadas rebeldes fueran una entelequia, las interrogantes eran reales, y toda Bolivia comenzó a obedecer la exortación del comunicado. El periódico «Prensa» —creado por el Gobierno y hasta ese momento impulsor entusiasta de las medidas gubernamentales— publicó la denuncia. El ministro del Interior, coronel Juan Ayoroa —uno de los hombres del régimen barrientista y portavoz de sectores derechistas del Ejército—, intentó sancionar a «Prensa». El ministro de Informaciones, Alberto Bailey, miembro de la izquierda civil del Gabinete, se opuso, originando una crisis.

Presionado por la creciente in-

quietud de la opinión —en un proceso de derechización al que se sumaban las presiones de las Fuerzas Armadas, para quienes la puesta en claro del «affaire» era el «test» de lo que podían esperar en relación a otras culpas—, Ovando debió declarar que encomendaría a la llamada Comisión Moralizadora, creada meses antes por decreto para establecer la confianza pública en el régimen, el esclarecimiento de los hechos. Pero se trataba de otra estratagema: el 8 de abril, Vidal Jiménez había silenciado, encarcelándolo. En junio, el respetado general Bernardino Bilbao Rioja, presidente de la Comisión Moralizadora, declaró que no investigaría «denuncias apócrifas o anónimas», ya que no se conocía la composición o responsabilidad de las fuerzas armadas rebeldes denunciadas. En agosto, el ministro de Informaciones dimitió. Y el coronel Ayoroa clausuró definitivamente el periódico «Prensa». Ovando había enterrado otra vez el caso.

Sin embargo, el «affaire» de las armas y de la muerte de Barrientos siguió erosionando secretamente la estabilidad del régimen ovan-

distista. A través de los turbulentos episodios que abarcaron el cambio de Gabinete en mayo, la dimisión del general Torres como jefe de las Fuerzas Armadas en julio, la definitiva derechización del Gobierno y su abandono de todo el programa revolucionario, la intencional reacción de golpe militar en octubre —encabezada por el general Rogelio Miranda, pero instrumentada por el Estado Mayor argentino— y la toma del poder por el mismo Torres, fueron surgiendo esporádicamente nuevos reclamos de investigación sobre la muerte de Barrientos.

En noviembre del año pasado pude recoger en La Paz, cotejando diversas fuentes civiles y militares, una hipótesis coherente del «affaire», que puede resumirse así:

En 1968, el Presidente Barrientos viajó a Suiza con el propósito (cierto o simulado) de someterse a un tratamiento médico. Ovando movía hábil y discretamente, bajo los pies de Barrientos en esa época, el terreno militar: el Presidente entonces contraatacaba a su ambicioso asociado creando un cuerpo de represión —una especie de guardia pretoriana compuesta por 400 hombres, todos formados en la lucha contra la insurrección por los norteamericanos—, que iba a estar a sus órdenes personales. Barrientos llevó a Suiza la idea de obtener armas para fortalecer esa guardia personal y también las federaciones campesinas, único apoyo político que parecía restarle. (Al mismo tiempo, iba preparando lo que sería llamado el «Plan de mayo», y que vendría a descubrirse entre sus papeles personales inmediatamente después de su muerte: declararse dictador por sorpresa, disolver las Cámaras y llevar a cabo,

trajes  
americanas  
pantalones  
camisas

*Terlenka*® **YOUNG**

... acostúmbrese a gustar!



# LOS MISTERIOS DE BOLIVIA

en veinticuatro horas, una San Bartolomé boliviana de opositores militares y civiles. En esas listas se pudieron verificar luego los nombres de Ovando, Torre y otros generales.)

En Suiza, mientras realizaba sus gestiones de compra, Barrientos estableció contacto con el servicio de Inteligencia de Israel, país que en esa época sufría un embargo de armamentos en Europa Occidental y en los Estados Unidos. De ese contacto surgió una propuesta, aceptada por Barrientos: éste compraría armas por 50 millones de dólares, pero el cargamento nunca llegaría a Bolivia, quedando su transporte fuera de Suiza a cargo de la Inteligencia israelí. El Presidente recibiría una apreciable comisión por el negocio.

Al regresar Barrientos a Bolivia, ciertos círculos del Gobierno se enteraron, inevitablemente, de la astuta operación.

Los beneficios eran tan altos que no debe de haber sido difícil una distribución suplementaria para obtener discreción de ciertos generales, ministros y funcionarios. En esa cadena de jerarquías estaban, sin duda, Quintanilla y otros.

Posiblemente en conocimiento del «Plan de mayo», así como en posesión del dato de que Barrientos había quedado inerte, al elegir el dinero antes que las armas necesarias, Ovando fue apurando una minuciosa conspiración para desembarazarse del Presidente.

En primer término, organizó su viaje a los Estados Unidos. En abril, cuando Barrientos viaja a Arque —visita que tenía programada con un mes de anticipación y constaba públicamente en la agenda presidencial—, Ovando realiza una jira de inspección militar por los Estados Unidos.

Pero el 27 de abril, además de los campesinos, las autoridades de Cochabamba, Barrientos y sus dos acompañantes (parte de una fatal jactancia del Presidente consistía en viajar al interior sin séquito ni escolta, en su propio helicóptero), habrían estado en el valle de Arque cuatro militares de absoluta fidelidad a Ovando: el capitán Faustino Rico Toro —famoso «ranger» de la compañía Trinidad, que en 1967 había perseguido afanosamente a la columna del «Che» hasta ser derrocado en el combate del Moroco— y tres de sus lugartenientes de la Trinidad. (Cuando Ovando tome la Presidencia en 1969, Rico Toro será jefe de su Casa Militar.)

La hipótesis dice que los cuatro oficiales ovandistas estaban vestidos de paisano, en una ladera del valle, frente a una estrecha quebrada por la que debía pasar el helicóptero presidencial después de su despegue. Cuando el aparato cobra altura, en medio del estruendo del motor, de las aclamaciones y los aplausos de la multitud, algunos testigos creen oír ráfagas de ametralladora que parten de una

ladera. El helicóptero se tambalea, choca contra un cable que era imposible no fuera advertido por el piloto Estivariz, si hubiera estado en posesión de sus facultades, y cae a tierra incendiado.

Esta semana empezaron a aparecer en Bolivia los datos corroborativos de parte de esa hipótesis: los de un accidente provocado, aunque todavía no se ha indicado oficialmente a los culpables.

En La Paz, el padre del edecán Orellana afirma que los cuatro oficiales que vistieron el cadáver de su hijo testificaron que presentaba heridas de bala. «Esos oficiales —añade Orellana, padre— estarían dispuestos a declararlo así, con autorización del alto mando».

Se ha exhumado el cadáver del piloto Estivariz. La nueva autopsia revela muerte «por asfixia y quemaduras», pero señala un orificio de bala en la región renal.

Un teniente de la Policía de Tránsito, Mario Bolívar, que estaba en Arque el día del accidente y ayudó al rescate de los cuerpos, ha declarado que al caer el helicóptero vio a tres hombres que corrían hasta la máquina, la examinaban y luego huían hacia la montaña. Bolívar ha añadido que se le hicieron presiones, aparentemente desde superiores jerárquicos, para que no revelara esos datos.

Puede adivinarse fácilmente que la investigación del «affaire» cuenta con dos grupos opositores: el que se benefició del negocio con las armas y el que se benefició con la muerte de Barrientos. Por las características del entorno militar y político del régimen en ese tiempo, además, ambos grupos podrían ser, sin mucha dificultad, uno solo. ¿Quiénes integran ese conjunto de usufructuarios, que son, a la vez, posibles culpables? Sistematizar los hechos hasta aquí narrados conduce inevitablemente a ciertos nombres: en primer término, el del general Alfredo Ovando Candia, actual embajador boliviano en España. Después, a los militares del barrientismo, que, estrechamente ligados al régimen desde 1964, fueron separándose hacia la línea de Ovando —o que, como es el caso del general Luis Reque Terán, actual jefe de las Fuerzas Armadas—, y otros, nunca fueron ovandistas, sino meros supervivientes del barrientismo. En torno a esas figuras principales, se podría ubicar a los probables cómplices y ejecutores, del tipo de Roberto Quintanilla o el capitán Rico Toro.

Naturalmente, todo esto sigue estando situado en el terreno de la hipótesis que manejan los observadores bolivianos. Sólo una conclusión totalizadora de la investigación oficial puede corroborar esa hipótesis. Parece más seguro, sin embargo, otro riesgo: que el régimen del general Torres, internado en las peligrosas aguas de este «affaire», termine antes que la investigación. ■ C. M. G.

## LA EDUCACION DE PALMIRA

Nuria Pompeia • Manolo V.



EL MUNDO ES DE LOS JOVENES, PALMIRA...



YO TAMBIEN LO FUÍ Y SENTÍ ESA REBELIÓN Y ESAS GANAS DE CAMBIARLO TODO...



HICE LA GUERRA PARA CAMBIAR EL FRENTE POPULAR, ATEO Y MARXISTA. YO TAMBIEN QUERÍA UN MUNDO MEJOR, COMO VOSOTROS...



PERO SIEMPRE CONSERVÉ LA DECENCIA DE ESTAR CORRECTAMENTE SENTADO DELANTE DE MI PADRE Y DE PEINARME DOS VECES AL DÍA!..